

APUNTES SOBRE COLOMBIA

Bernardo Gutiérrez B.

Periodista

Colombia es, a vuelo de pájaro, uno de los países más singulares de la América hispana. El viajero que se acerca a esta nación por vez primera se siente impresionado por la diversidad de sus territorios y climas. Para comenzar, este país de cuarenta y cuatro millones de habitantes es el único de la América del Sur con costas en dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Localizado justo al norte de la línea ecuatorial, en su millón largo de kilómetros cuadrados de extensión (dos veces la península ibérica) habitan no uno, sino varios países: desde el conformado por las zonas centrales altiplánicas y montañosas de climas fríos, pobladas por gentes de costumbres marcadamente conservadoras, hasta el que se asienta en las vastas y fértiles regiones cordilleranas que mueren en las costas del Caribe, donde conviven en abigarrada polifonía numerosos grupos humanos, producto histórico de un mestizaje de cinco siglos.

En los accidentes de su geografía, las verdioscuras serranías que se asoman al océano Pacífico en la mitad occidental del país albergan numerosas comunidades descendientes de esclavos negros que fueron traídos a la Nueva Granada, siglos atrás, por la corona española para los trabajos manuales y más ásperos en este nuevo mundo. Esta importación se había hecho necesaria ante la creciente merma de comunidades nativas, debida a la sobreexplotación colonial de las tribus indígenas que los peninsulares habían sojuzgado en el primer siglo después de la conquista.

En los laterales de esta imagen se perciben, además, grupos humanos de colonizadores diseminados por las amplísimas llanuras y selvas del oriente y sur del país, territorios que aún hoy esperan ser incorporados a la modernidad colombiana, y que representan la mitad de la extensión del territorio nacional.

Este mosaico humano se asienta sobre un tierra rica en paisajes naturales, en riquezas minerales, en tierras fertilísimas. Viendo la historia nacional, los colombianos relatan, a manera de chascarrillo de negra humorada, un pequeño cuento: en el momento de la creación del mundo, cuando Dios distribuía riquezas entre los países en los que dividía su creación, llegó a la

esquina del mapa suramericano destinada para Colombia, y entonces san Pedro, que miraba este acto de suprema taumaturgia por encima del hombro de su señor, anotó de repente: “¡Pero señor, qué hacéis!... Estáis dándole todo a este país, riquezas sin medida en el subsuelo, los mejores y más lindos paisajes, los climas más diversos, la mejor y más fértil tierra de cultivo. Habéis puesto allí lo mejor de vuestro repertorio. ¿No os parece injusto con otros países, a los que siempre les escatimáis algo, y en cambio a Colombia le estáis dando todo?”. El creador del universo respondió entonces a su escandalizado apóstol: “Espera, Pedro, y verás qué clase de gente voy a poner dentro de ese país, y no te quejarás de desequilibrio”.

¿Cómo se ve Colombia desde fuera de Colombia? ¿Cuál es la imagen que proyecta ante el mundo este país de regiones, que en las últimas décadas ha sido fuente generosa de agitados conflictos sociales e historias criminales, y que en la actualidad se erige –dudoso honor— como el primer productor y exportador mundial de cocaína? La cocaína, ese derivado de la sagrada planta de coca, venerada por generaciones de indígenas americanos como su madre cósmica, su bendición cotidiana, su aglutinador social, hoy causa de problemáticas sociales y políticas que, entre otras y nefastas dinámicas, enfrentan a los gobernantes actuales con los herederos de las antiguas culturas autóctonas, culturas que en rigor deberían ser consideradas como las herederas de estas tierras, pero que de hecho son violentadas por tremendas tensiones cuya naturaleza se origina en el empuje de grandes intereses económicos y sociales de múltiple origen, que hacen caso omiso de las culturalidades más auténticas y antiguas del territorio americano.

En la lejanía, y sin mayores datos sobre la complejidad de su historia, Colombia aparece como un país más del área andina, que vive episodios de adolescente, con menos de dos siglos de vida autónoma después de la emancipación del poder colonial español. El país se muestra también como legatario de rígidas estructuras sociopolíticas provenientes de sus épocas coloniales, cuya impronta aún pervive, muchas veces de manera inadvertida, en amplias manifestaciones de la vida colombiana. Estas estructuras heredadas propician una aguda inequidad social (Colombia tiene el dudoso honor de ser señalado como el país de América Latina en donde la brecha entre los muchos pobres y los pocos ricos es más amplia), y amparan un sistema de privilegios de unos pocos en detrimento de una mayoría, cuya existencia y condición es reconocida sólo a través de tibias acciones del estado, que en general producen efectos paliativos sobre aspectos accesorios y marginales de la pobreza y la inequidad, no sobre

lo fundamental. Así, de manera reiterada, se dejan sin tocar a fondo los grandes temas que propician esta inequidad, tales como las estructuras de la propiedad de la tierra, la concentración de los recursos en pocas manos, y el sometimiento del capital primario autóctono al gran capital financiero multinacional, entre otros lastres que arrastra la historia colombiana hasta hoy.

Mirando un poco más atentamente, encontramos la imagen de un país sumido en un conflicto de larguísimo aliento que se inicia desde el primer momento de la historia independiente de Colombia, revestido de diversas formas a lo largo del tiempo. En las últimas décadas ha adoptado el rostro de una contienda en donde participan fuerzas del estado, grupos guerrilleros de origen izquierdista, grupos paramilitares auspiciados -en muchos casos- por el mismo estado y los grandes dueños de la riqueza, y grandes mafias surgidas y fortalecidas al amparo del narcotráfico. Y en medio, como un fantasma no tan invisible, la mano armada de la política y los intereses de los Estados Unidos. Este conflicto, que en su forma actual dura ya dos generaciones, y que nadie afirma entender a cabalidad, se ha convertido en una gran arteria rota de todo lo que signifique avance en la construcción de mejores condiciones de vida para los colombianos.

Hay que decir también que la manera cómo es vista Colombia desde fuera no acierta del todo, ni tampoco se equivoca del todo. En todo caso, le faltan elementos de juicio. Si bien es cierto que las estructuras de la sociedad colombiana se fundan históricamente sobre bases de inequidad heredada, que fomentan pobreza y desigualdad, también lo es que Colombia posee una inmensa variedad de facetas que evidencian su constante valía humana en medio de unas estructuras sociales imperfectas e injustas. Estas facetas se reflejan en la existencia de sectores de gran dinamismo y modernidad, diríanse islotes de actividad productiva en variados órdenes, que poco tienen que envidiar a los de otros países económica y socialmente más estables.

Estos “islotes” flotan en medio de una convulsión social única en América Latina por su duración y su intensidad, que origina fenómenos de corrupción y violencia en un escenario de impunidad sin parangón en el continente. Esto último hace inoperante, entre otras cosas, uno de los conjuntos de leyes más complejos de América. Tan complejo y completo, que las incontables leyes emitidas a lo largo del tiempo para regular los usos y costumbres sociales forman en ocasiones una inescrutable maraña de reglamentaciones que facilita, a la postre, su violación

permanente. Incluso las ramas del poder público encargadas de velar por la justicia se ven continuamente enredadas en las contradicciones de numerosos códigos imperantes. Las palabras de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, reproducidas en una entrevista a un diario colombiano, no pueden ser más descriptivas: “(...) Le doy un ejemplo: si hoy un marciano llegara a Colombia y leyera nuestra constitución y nuestras leyes, pensaría que ha llegado a un paraíso, porque legislativamente Colombia, formalmente hablando, es un país de los más ricos y poderosos del mundo. Cuando el visitante descendiera y viviera pocos días la realidad, seguramente se devolvería de inmediato. (...)”

Continuando con este escrutinio, el viajero podrá distinguir varios entornos sociales, históricos, económicos, raciales. Estos entornos muchas veces no se tocan, no se acercan entre sí, y en ocasiones ni siquiera se reconocen: algunos sectores, los más privilegiados, llegan a negar incluso la existencia misma de otros sectores, que viven en las franjas más desposeídas de la sociedad.

A manera de ejemplo, echemos un vistazo a la lógica oficial empleada para determinar los índices estadísticos de pobreza, lógica diseñada por los tecnócratas de sucesivos gobiernos y adoptada casi sin reservas por las élites y los medios de comunicación con el fin de describir los niveles de indigencia, o sea el número de colombianos que viven en la pobreza absoluta o casi absoluta –criterios que obviamente condicionan los fundamentos de la planificación macroeconómica de los recursos del estado-. En este sistema indiciario oficial se modifica la norma evaluadora hacia abajo, es decir, se disminuye la exigencia de requisitos para situar en uno u otro lugar de la estadística a los pobres, con el resultado de que en el cuadro final estadístico muchos pobres aparecen formando parte de niveles superiores, bien sea que ocupen un mejor nivel económico relativo, o que desempeñen una actividad que a juicio de los planificadores los sustrae del desempleo y la penuria absolutas. Se modifican así los cuadros descriptivos de la realidad social nacional. Algo semejante podríamos anotar sobre los criterios para medir el empleo y el desempleo, que en los últimos años han sufrido modificaciones similares en beneficio de las relaciones públicas de los sucesivos gobiernos, siempre deseosos de presentar logros en sus políticas económicas. También se podrían observar iguales maniobras cuando se trata de presentaciones relativas a los problemas ambientales y a la presencia efectiva del estado en múltiples zonas del territorio, para citar sólo unos pocos de los mecanismos de manipulación empleados. Se comprende que de esta manera se facilita la

presentación de una imagen más rosa, más aceptable, de la realidad colombiana. Al mismo tiempo, se comprende también que, deformada en su descripción la realidad, se hacen inoperantes muchos de los diseños elaborados para influir en la misma, por perversión en el análisis y sus diagnósticos.

A lo largo de su historia Colombia ha sido regida desde el altiplano cundiboyacense, en donde se asienta Bogotá, ciudad a 2600 metros de altura sobre el nivel del mar. El altiplano bogotano se sitúa a centenares de kilómetros de las costas marítimas más cercanas, en medio de inmensas montañas, que han sido de muy difícil tránsito hasta hace pocas décadas, cuando los transportes aéreos y la pavimentación de las tortuosas carreteras facilitaron el auge de modernos medios de transporte.

Tal condición de insularidad y alejamiento de los puertos marítimos, alejada de una visión de las oportunidades ofrecidas por los dos océanos que bañan sus costas, imprimió una particular manera de ser a la formación del imaginario nacional, atrincherado en los palacetes decimonónicos de las élites capitalinas. Un modo de mirarse que velaba la percepción de que el mundo es más extenso que lo se observaba desde las ventanas de las casas de tapia pisada y bahareque de la capital. De aquí surgió una mentalidad provinciana y desconfiada de todo aquello que oliera a foráneo. Aún hoy el alma colombiana manifiesta frecuentemente estos reflejos de cautela extrema ante las novedades del progreso y el fenómeno inmigrante (inmigración de personas y de ideas), fenómeno que ha sido históricamente desestimulado mediante trabas legales a los extranjeros cuando se han querido aposentar en el país.

En la fría capital bogotana, el clero y las clases de propietarios rurales y engolados gobernantes rumiaban en su aislamiento provinciano teorías importadas sobre la sociedad y el poder que intentaban proyectar –ilusoriamente— sobre vastas regiones de la antigua Gran Colombia, territorio que en algunos momentos de su primer siglo de vida llegó a ser dos veces lo que es en la actualidad Colombia, y que en pocas décadas perdió casi una tercera parte de su territorio original, precisamente por la inacción y la indiferencia de los dirigentes criollos que, aislados en ese lejano altiplano bogotano, no se daban cabal cuenta de la magnitud y la complejidad del territorio heredado del fragmentado imperio español.

Incluso hoy, a pesar del progreso de las comunicaciones aéreas y terrestres, no es fácil ni rápido ir de un lugar a otro del país, y mucho menos viajar al extranjero, aunque en las últimas dos décadas se hayan despedido de Colombia, en un viaje sin regreso, varios millones de colombianos en busca de una vida mejor en otros lugares del mundo (se calcula que cerca del diez por ciento de la población colombiana, unos cuatro millones de personas, reside en otros países). Algún estudioso de la formación nacional ha escrito que la historia de Colombia sería otra si la capital de la nación se hubiera fundado a orillas del Caribe, y no en ese nuboso y frío altiplano en donde se fundó Santa Fé de Bogotá. Al borde del mar —decía— el espíritu está más abierto al mundo exterior y son más amplios los horizontes, mientras que en las elevadas y frías mesetas del interior el pensamiento se encierra en sí mismo, al tiempo que las nubes y el frío permanente (en este país tropical no existen las estaciones, y la altura sobre el nivel del mar es la que determina la temperatura) obligan a los cuerpos y a las mentes a recogerse en la protección de sus casas, propiciando así mundos cerrados y minúsculos.

Las clases dirigentes colombianas, asfixiadas por sus tejemanejes endogámicos, han percibido siempre al país como si fuera un solo cuerpo, un solo organismo, ignorando las fracturas y los abismos existentes entre los diversos compartimientos de la identidad nacional (por llamarla de alguna manera). Esta visión correspondería a la de unos comensales que, sentados alrededor de una mesa de banquetes en donde los platos ofrecidos están dispersos en otras mesas del restaurante, imaginan que la cena consiste únicamente en el plato que tienen ante sí, ignorando los de las otras mesas.

Sin duda en estas características antinómicas reside una de las principales razones de la conflictiva vida contemporánea colombiana, con su tragedia de violencia y segregación social, su creciente brecha entre los que poseen y los desposeídos que viven sin alcanzar elementos básicos para lograr una vida medianamente digna y feliz, siempre tan esquiva a la inmensa mayoría de los colombianos.

Hablemos ahora de la identidad colombiana. Esa condición llamada “identidad”, sustancia difusa como la que más, cuya visualización se presta a toda clase de elaboraciones teóricas y manipulación de ideas y juicios de valor. Como hemos anotado antes, Colombia es un país variopinto, formado por una multitud de sectores raciales, culturales, históricos, económicos. La

herencia hispánica, la herencia indígena, la herencia africana, y a partir de los inicios del siglo XX las herencias menores europeas, levantinas y árabes, están presentes en todo número de proporciones. En alguno de sus textos, el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez anota que, solamente durante la época colonial, llegaron a distinguirse en el virreinato de la Nueva Granada 18 divisiones raciales, dependiendo del grado de las mezclas entre diversos orígenes. Estas divisiones arrastran lógicamente diferencias culturales, lingüísticas, incluso gastronómicas. Y dada la abrupta geografía de los inmensos territorios del virreinato, muchos de los grupos mencionados por García Márquez permanecieron prácticamente aislados entre sí durante siglos, y sólo en épocas recientes se han establecido enlaces de comunicación entre ellos.

En contravía de estas realidades, las estructuras políticas colombianas se han ido generando alrededor de factores que provienen principalmente de sectores de raza blanca, y muy pocos de raíz mestiza. Como no han existido sólidos círculos de poder que se originen en raíces indígenas o negras, etnias que aportan una proporción considerable de la población nacional, estas poblaciones se han quedado sin mayor representatividad en la formación de los ordenamientos políticos y económicos de ámbito nacional. Por añadidura, las castas dirigentes heredaron el espíritu, si no la letra, de las estructuras hispánicas coloniales, signadas por el centralismo y el autoritarismo, amén de heredar también un desprecio histórico por las razas indígenas y por los esclavos negros provenientes en primer lugar del África, y en segundo lugar de la región del Caribe, que fueron traídos al virreinato como mano de obra para el campo y los incipientes núcleos urbanos.

Partiendo de las dinámicas arriba descritas, la búsqueda de la “identidad” colombiana es una tarea de múltiples frentes. Esta “identidad” es, por llamarla de alguna manera, una “identidad de la dominación”, es decir, una identidad de las clases dominantes, que a su vez beben de influencias y fuerzas importadas de otras culturas, especialmente de la irresistible cultura norteamericana, con su aplanadora que avasalla los medios de comunicación y moldea las apetencias de ideología y de consumo de estas clases.

Es así como lo nativo, lo que podríamos llamar “lo propio”, al no hacer parte de los conceptos alienados de cultura que manejan las élites tradicionales, se torna “exótico” y adquiere perfiles

“foráneos”. En el mejor de los casos se lo incorpora al folclor, y es visto con una actitud paternalista y casi peyorativa. Por otro lado, los “valores” oficiales se imponen a través del impacto de los medios masivos de comunicación, propiedad de las mismas élites. Resultado de lo anterior es que las identidades frágiles (minorías, grupos marginales) son condenadas a ser devoradas por la corriente predominante, no obstante poseer en muchos casos un gran valor histórico y una importante dimensión cultural (por ejemplo, las negritudes, o las culturas indígenas que se resisten a ser absorbidas por la cultura oficial). Estas identidades se enfrentan entonces a la disyuntiva de asimilarse o marginarse. O como una tercera opción, aprenden a resignarse a vivir dentro de una cierta marginalidad, sin ser asimiladas del todo pero adoptando los símbolos de la dominación, sus características culturales, características del lenguaje, incluso características en el vestir y en la adopción de gustos personales. El ser auténtico se torna así un pasaporte a la marginalidad.

En Bogotá, por ejemplo, en los sectores económicamente más prósperos de la ciudad, en donde se levantan los cines modernos, los restaurantes y las tiendas de moda, es una rareza encontrar un transeúnte de raza negra, o algún indígena (salvo aquellos que se han desplazado a las urbes en busca de refugio, y deambulan por las calles, mendigando o vendiendo baratijas). Y es mucho más escaso encontrarlos como usuarios de los establecimientos mencionados. Existe una buena probabilidad de que si por excepción nos topamos allí con algún negro o indígena, éste será un extranjero del Caribe o de los Estados Unidos, que por supuesto no se sentirá con menos derecho a estar allí que los criollos de tez clara que están a su lado en otras mesas del restaurante, la tienda o la cafetería elegantes. Sin embargo se calcula que hoy viven en Bogotá entre ciento cincuenta mil y doscientas mil personas afrocolombianas, es decir, de raza negra o mulata, y varias decenas de miles de indígenas desplazados de sus ancestrales tierras campesinas. Estas multitudes han ido llegando a la gran ciudad expulsadas de sus territorios por la pobreza y por el conflicto bélico, y se han asentado en áreas urbanas, muchas veces de invasión ilegal, que se localizan lejos de los sectores prósperos. Se podría hacer el experimento de preguntar a un parroquiano —blanco o incluso mestizo— que se encuentre en alguno de estos cafés o restaurantes, sobre si conoce la existencia de esos miles de personas de raza negra que habitan su misma ciudad, y casi con seguridad nos mirará como si estuviéramos mal de la cabeza. Lo anterior sucede en un país en donde hay más de cuatro millones de afrodescendientes (que representarían más o menos el diez por ciento de la población total de Colombia), y poco más de un millón de indígenas.

Una característica de la sociedad colombiana (compartida también por muchos de los países latinoamericanos, especialmente los del área andina) es lo que se podría llamar la “modernidad impostada”. Veamos qué significa esto. Es evidente la apariencia de “modernidad” que presentan nuestras sociedades, en donde encontramos calles asfaltadas, semáforos en cada esquina, sistemas de transporte masivo, cafés internet, una que otra autopista que merezca ese nombre, bancos informatizados, modernos aeropuertos y pilotos para llevar los aviones con destreza. Y las gentes que se mueven dentro de estas redes llevan trajes de moda, usan con soltura teléfonos celulares, conducen sofisticados automóviles, viajan a Miami y a Madrid y a París a cada momento (los de las élites), etcétera. En fin, se observa en la colmena humana eso que hoy se denomina “vivir la agitada vida moderna”.

Debajo de esta fachada, sin embargo, la manera de ser “nacional” se debate en un mar de contradicciones, como en un teatro de truculencias, desorientada y fragmentada en su identidad, con un trasfondo de pensamiento notoriamente primario que vaga por espacios decimonónicos de elaboración intelectual. Un ejemplo en donde palpamos evidencias de lo anterior se da en la confusión común entre cómo se concibe la capacidad para utilizar tecnologías con la capacidad para crear tecnologías. Se confunde la habilidad para manejar un sistema de computación, digamos, con la posesión de la tecnología informática, sin que se evidencie el gran abismo existente entre ambas realidades.

Resultado de lo anterior es una paralizante incapacidad para adquirir una visión auténtica de la sociedad que emane de la entraña de la sociedad misma (salvo la visión patrioterica y manipuladora que del paisaje, el folclor y los “héroes” nacionales crean, de modo oportunista, las clases dirigentes), que facilitaría que al cotejar la visión con la propia percepción, la realidad se pueda interpretar e intervenir con resultados constructivos. Sólo así se edificarían bases sólidas para los procesos de avance social. Un segundo resultado es, por correlación, una sociedad insegura, presa de los vaivenes de la moda y de las influencias extranjeras, mediocre, que busca con afán parecerse a las sociedades de los países en donde beben sus riachuelos culturales, fuentes de lejano origen, pues desea por sobre todo vivir la realidad social propia como si fuera la de uno de esos países que se admiran o se envidian.

En este punto nos detendremos para hacer un breve recuento de algunos hechos históricos ocurridos en Colombia en el último cuarto del pasado siglo, claves para comprender aspectos de la historia presente y que seguirán afectando sin duda los años venideros.

El primero de estos fenómenos se refiere a un acontecimiento fundamental, cuando en mayo de 1985 se organiza un partido político llamado Unión Patriótica (UP) gestado desde el movimiento guerrillero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), insurgencia de origen campesino que ya entonces llevaba veinte años combatiendo al estado. La UP fue un partido de izquierda promovido por ese grupo guerrillero como parte de las conversaciones que mantenía con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. Aunque el partido fue creado legalmente y de manera abierta, el grupo guerrillero que lo originó no se desarmó ni frenó sus ataques a fuerzas e instituciones del estado. Se hizo evidente que su intención era la de crear una fuerza política paralela que actuara dentro de la legalidad, y que recibiría, de manera tácita, el apoyo del grupo armado.

En sus comienzos, entre los miembros del nuevo partido hubo personas pertenecientes a las FARC y al Partido Comunista Colombiano, y también gentes de diversas tendencias dentro de la izquierda, que llegaron al partido atraídas por sus postulados progresistas y por la clara necesidad de formar una fuerza política legal que estuviera cercana a los intereses populares, que no existía. Muchos de los recién llegados no tenían nada que ver con el movimiento guerrillero ni compartían sus métodos violentos, y creyeron encontrar en la UP un canal para exponer sus ideas y hacer sus reclamos legítimamente, frente a un poder político que los había mantenidos excluidos por muchos años, y que controlaba los hilos del estado y del gobierno. En poco tiempo la UP fue cambiando su imagen e incluso su naturaleza misma, y de ser un vástago de la guerrilla se fue convirtiendo en un movimiento cada vez más independiente de la misma, que comenzó a llenar muchas expectativas de los sectores progresistas, pues se pensó que podría llegar a convertirse en una alternativa democrática viable frente a los dos partidos tradicionales colombianos, el liberal y el conservador, organizaciones lastradas por una historia de clientelismo, ineficiencia y corrupción.

En la UP se integraron sindicalistas, líderes comunales, organizaciones campesinas, miembros de la intelectualidad progresista, profesores, estudiantes, artistas de todos los cuños. El partido

fue reconocido de manera oficial en 1986 como una fuerza política legal, y conquistó electoralmente un discreto segmento del poder político: alcanzó varios escaños en el Congreso Nacional (5 senadores y 9 representantes, de un total de 100 senadores y unos 150 representantes), además de unos 300 asientos en los cabildos municipales (que sumaban cerca de quince mil en todo el país). A pesar de que estos resultados no eran propiamente espectaculares, la UP llegó a ser considerada la cuarta fuerza electoral más votada en Colombia. Pero estas modestas victorias, y este inicio hacia un proceso de consolidación de la izquierda, se truncó nada más comenzar. Aunque los resultados iniciales eran discretos, desde el primer momento se despertó el recelo de oscuras fuerzas dentro de los establecimientos de poder colombianos, que tradicionalmente no han permitido nunca el menor desafío a su hegemonía histórica.

Durante los años siguientes la UP fue blanco de una mortal violencia cuyo origen nunca se pudo establecer con claridad en términos judiciales, pero que las continuadas evidencias en manos de los medios de comunicación y de los mismos miembros de la UP hacían apuntar hacia sectores incontrolados de las fuerzas del estado, hacia caciques políticos de los partidos tradicionales, hacia alianzas entre éstos y el narcotráfico, y hacia nacientes grupos paramilitares (que podríamos llamar “protoparamilitares”).

Al comienzo los muertos fueron decenas, luego centenares, y finalmente fueron miles los sacrificados. Este festín de violencia, del cual no daban mucha cuenta los grandes medios de comunicación ni era admitido por el estado como deliberado, condujo de manera paulatina a la desaparición de la UP del escenario político nacional, para todos los efectos prácticos.

No es difícil imaginar el impacto que tuvo este sacrificio en la vida política y social del país (en su reporte de abril de 1988, Amnistía Internacional describió la campaña de exterminio de líderes de la UP, y de otras personas afines al grupo político, como una “campaña deliberada de asesinatos políticos”, añadiendo que en estos crímenes estarían implicados miembros de las fuerzas militares y de seguridad del estado. El gobierno del momento, presidido por Virgilio Barco Vargas, rechazó enérgicamente estos cargos hechos por AI). Así pues, se frustraron las esperanzas de formar una fuerza democrática de izquierda, esperanzas que hoy siguen a la espera de ser satisfechas, en medio de la existencia de una constante campaña de represión a

lo largo de los años y hasta hoy, y por todos los medios a su alcance incluido el asesinato, de todo lo que parezca amenazar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, y de sus representantes en las clases políticas.

El segundo fenómeno histórico, que forzosamente está imbricado en el que acabamos de describir, y que de alguna manera se desarrolla en paralelo al mismo, es el fenómeno del narcotráfico. Aparte de su aspecto criminal y policial, con sus ramificaciones internacionales y su condicionamiento de la vida social y de la imagen de Colombia en el mundo, la importancia del negocio del narcotráfico en la vida y la historia nacionales no será nunca suficientemente enfatizada: el narcotráfico ha alimentado una exportación de primer orden, con la consiguiente perversión del manejo económico legal, y con sus secuelas de corrupción producida en todos los estamentos de la vida colombiana (incluido el clero). Ha penetrado insidiosamente en la política y en los políticos, en las fuerzas del estado, en los aparatos judiciales, en fin, en el panorama amplio de la nación colombiana. El narcotráfico ha distorsionado y pervertido muchos esfuerzos dirigidos a combatir los males sociales, económicos y políticos del país, pues al no poder ser controlado ni ser objeto de planificación por su misma naturaleza de fuera de cualquier ley, todos los modelos de desarrollo propuestos pierden su consistencia y se convierten en modelos de imperfecciones por carencia, inválidos como planteamiento sólido.

Y finalmente, la violencia que el narcotráfico ha engendrado dentro de la sociedad colombiana ha ido modificando gradualmente la naturaleza de los valores tradicionales del trabajo honesto como fuente de riqueza, y del respeto a la vida y a la dignidad humanas, trocándolos en un afán de dinero fácil, y en una asombrosa facilidad para matar al prójimo y percibir su muerte como un “incidente” y no como una tragedia (a menos, claro, que la víctima sea famosa o de alta clase social, en cuyo caso las élites y los órganos de justicia se desgarran las vestiduras y claman por un castigo ejemplar para los culpables, respuesta que no existe prácticamente para los miles de víctimas causadas entre el campesinado o entre los ciudadanos de a pie en las ciudades).

El proceso colombiano hacia la consolidación del narcotráfico como condicionante de la vida nacional comenzó de manera casi imperceptible e incluso ingenua, cuando a finales de la década de los años sesenta y comienzos de la de los setenta grupos de jóvenes norteamericanos llegaron a Colombia atraídos por el exotismo de las tribus indígenas y la belleza

de las playas de la región. Llegaban en busca de una marihuana de gran calidad que se cultivaba en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, macizo montañoso al pie del Caribe colombiano, a la cual llamaron “Santa Marta Golden” (“La Dorada de Santa Marta”), en honor al provinciano puerto al pie de la Sierra que dormita hace más de cuatro siglos en la parte interior de su hermosa bahía. Para entonces la fama de “la hierba” había trascendido las fronteras nacionales, y multitudes de jovencitos hacían acto de presencia en toda la zona para fumar sus ensoñaciones en compañía de los criollos de la región.

Entre estas pequeñas multitudes de gente menuda, los norteamericanos destacaban por sus ojos azules y cabellos claros. Después de disfrutar del humo aletargador, estos chicos y chicas – que venían casi todos de California—se llevaban a su casa lo que no habían alcanzado a fumarse, y así mataban dos pájaros de un tiro: se podían pagar el tiquete de regreso con la venta del excedente que portaban oculto en sus maletines de viaje, y se creaban una pequeña leyenda para sí mismos en el psicodélico –para la época-- estado de California, que era el punto de origen de casi todos estos pioneros de la vida relajada.

Paulatinamente, y ayudados en su tarea por la tradición de contrabando de todo tipo existente en la costa norte colombiana, en donde por generaciones miles de familias han vivido de esta operación bajo cuerda, los compradores de pequeñas cantidades de marihuana fueron derivando hacia la compra de cocaína, substancia que ya comenzaba a aparecer en el mercado en discretas cantidades, para llevársela de vuelta a Estados Unidos. El raciocinio no podía ser más sencillo: “Si estamos llevando a casa, a California, a Florida, tantos kilogramos de marihuana, que nos producirán tantos dólares al ser vendida ¿porqué no llevamos el mismo peso pero en cocaína, que nos va a reportar cinco o seis veces más ganancias que la marihuana?”

Por aquellas épocas Colombia no era productora, en sentido estricto, de la cocaína que compraban los viajeros norteamericanos. Tampoco se sembraba masivamente, como hoy, la planta de coca para destinarla a la producción de cocaína: la coca crecía en las regiones indígenas, en donde se cultivaba el arbusto –y se cultiva aún—para su consumo tradicional, en forma de la hoja misma. La coca que servía para producir la cocaína de exportación se producía en Bolivia y Perú, y se procesaba allí hasta alcanzar lo que se denomina “la base”, momento en el cual era traída a Colombia por los incipientes carteles de narcotraficantes para continuar su

elaboración química, y en esta última etapa de su refinación se convertía en la más pura cocaína del planeta.

Como toda demanda crea una oferta, y la cocaína colombiana era apetecida de manera creciente en el mercado norteamericano por su pureza y alta calidad, en pocos años los empresarios colombianos del narcotráfico estaban experimentando y aclimatando distintas variedades de la planta de coca para cultivarla en regiones distintas a las tradicionales, que pertenecían a tribus indígenas cuyos cultivos no estaban destinados a la producción de cocaína. De esta manera evitaban tener que comprar la base de coca a los productores originales de Bolivia y Perú, incrementando el control sobre el proceso de producción. Originalmente la planta, milenario arbusto sagrado de los pueblos indígenas suramericanos, encuentra su hábitat ideal en las tierras cálidas y húmedas de los valles de las cordilleras andinas, y como en Colombia la mayoría de estas tierras están pobladas, y por lo mismo son de difícil condición para cultivar el arbusto con fines de producir hojas para la elaboración de la cocaína, se hizo necesario investigar la manera de producir variedades de la planta que pudiesen crecer en otras tierras del país, muchas con suelos pobres, que eran en la época aún más marginales y solitarias de lo que son en el presente, principalmente en las grandes extensiones aledañas a las selvas del Amazonas y del Orinoco. De este modo se alcanzó, mediante sucesivas etapas de investigación llevadas a cabo por los grupos criminales, una planta capaz de crecer en todas las alturas, aunque con diversos grados de productividad dependiendo de la altitud y la calidad del suelo.

Poco a poco se crearon refinerías clandestinas de todos los tamaños y capacidades para procesar la hoja de coca, y los empresarios colombianos terminaron adueñándose del proceso productivo, desplazando a sus colegas de Bolivia y Perú. En un comienzo estos empresarios provenían principalmente de la zona del Valle de Aburrá, en donde se asienta la ciudad de Medellín, aunque en pocos años surgieron empresas similares a lo largo y ancho del país. Con los años la denominación “cártel de Cali”, y “cártel de Medellín” se hizo famosa en el mundo; pero también hay que añadir a estos dos grupos de reputación mundial los denominados “cártel del norte del Valle”, “cártel de la Costa”, junto a otros menores aunque más numerosos, que son los mayores sobrevivientes en la actualidad después de las ofensivas gubernamentales contra los dos primeros, apoyadas por fuerzas con equipamiento y fondos norteamericanos. El narcotráfico en Colombia está, pues, saludable en el presente, sigue adelante, y constituye aún

hoy uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana, no obstante las reiteradas negaciones de los sucesivos gobiernos nacionales.

Por inercia histórica, las ingentes sumas de capital provenientes del narcotráfico terminaron invadiendo de manera insidiosa la vida nacional. Paso a paso se solidificaron nuevas estructuras de riqueza y poder derivadas del dinero de los “narcos”, casi inadvertidas por una sociedad que en muchos casos se manifestaba complaciente y acomodaticia ante estos flujos de dólares que llegaban a manos llenas, y que irrigaban una economía débil y desestructurada en la época, en donde los sectores más amplios de población vivían –y viven aún– en entornos de penuria y violencia generada por la pobreza. Estos dineros fáciles dieron acceso a lujosos bienes de consumo en las clases altas, oportunidad de amplios negocios a las clases medias, y empleo más o menos remunerado a incontables habitantes pobres de ciudades y campos, sin importar ni reflexionar sobre el futuro que luego se encargaría de poner en evidencia la peligrosidad de ocupar buena parte de las energías nacionales de esta manera.

Paralelamente, esta complacencia se extendía a la aceptación, por omisión de mirada, de los constantes crímenes cometidos contra organizaciones políticas y sociales que, como el partido de la Unión Patriótica, eran de cotidiana ocurrencia. Para los centros de poder, situados en las urbes importantes, era fácil ignorar el exterminio de un partido formado por gentes de izquierda e intelectuales que en su mayoría eran de origen popular y vivían en lugares lejos de las grandes ciudades, o en las barriadas de éstas. El número exacto de víctimas de esta violencia contra la UP y contra defensores de derechos humanos y miembros de diversos sectores de la vida política nacional no se ha podido precisar hasta ahora, y es dudoso que se pueda cuantificar con alguna precisión en el futuro, dados los confusos parámetros dentro de los que se mueven la investigación criminal y la justicia colombianas: los estimativos van desde 3.000 hasta 5.000 víctimas. El balance de estos años, solamente en el seno de la UP, fue de 2 candidatos presidenciales asesinados, junto con 8 congresistas, 70 concejales, docenas de diputados y alcaldes, cientos de sindicalistas, líderes campesinos y líderes del partido comunista, y un sinnúmero de militantes de diversos movimientos sociales, además de simples transeúntes que tuvieron la mala fortuna de pasar por el lugar equivocado en el momento equivocado.

A lo largo de las últimas décadas de la historia colombiana, la lenta pero imparable ampliación de este conflicto de baja intensidad que vive el país se ha convertido en el fundamento de una

condición que no tiene similar en ningún otro país del continente hispanoamericano: estos crímenes y amenazas han conducido, de manera paulatina, a la interiorización de un espíritu intimidado entre los ciudadanos, que hace que muchos colombianos se autocensuren a la hora de emitir opiniones sobre la vida social y política. No sólo entre los medios de comunicación se da este fenómeno; también el ciudadano del común teme, esquiva, se retrae de opinar sobre muchas cosas que atañen al gobierno y a la política, o cuando lo hace lo hace de manera velada, sesgada, equívoca. No de otra manera se explica que los colombianos afirmen agresivamente en público que su país es “el mejor país del mundo”, y que en recientes encuestas hechas por organismos internacionales los resultados “revelen” que casi el ciento por ciento de la población es feliz. Así, hace poco una lectora del diario bogotano “El Tiempo” de Bogotá escribía, a propósito de una columna periodística aparecida allí sobre el tema: “(...) hace pocos años, un señor español, al poco tiempo de llegar a Colombia, me dijo: la gente tiene mucho miedo aquí, eso se nota (...)”

Detengámonos ahora brevemente en la dinámica del conocimiento social en Colombia. Como en casi todos los países del mundo, la problemática nacional es diversa y compleja. Todas las culturas tienen, y es una perogrullada anotarlo, problemas propios, conflictos propios. Y en todas las sociedades surgen, nombrados o elegidos o impuestos, gentes y grupos que se ocupan de ejercer la función de gestores en la búsqueda de algún tratamiento que alivie los conflictos y las desgracias sociales, proporcionando mejoras en la vida de sus ciudadanos. Es evidente que para que este esquema tenga siquiera la menor posibilidad de progresar en sus tareas, las clases dirigentes surgidas mediante los procesos antes anotados deben poseer, así sea en grado mínimo, perspectivas y conocimientos más amplios que los que poseen la mayoría de sus gobernados. Hasta aquí estamos en el terreno de lo obvio.

Debido a esguinces de su historia, en Colombia (y ésto podría aplicarse también a otros países de la zona andina), contrariamente a los enunciados anteriores, imprescindibles en cualquier formación de unas clases dirigentes más o menos eficientes como tales, se produce la peculiar característica de que sus clases dirigentes no reconocen muchos de los problemas fundamentales que aquejan históricamente a su sociedad, y basan sus postulados y acciones de gobierno en la omisión del análisis de problemas nacionales que en otros países serían de primordial importancia, pero que en Colombia son transmutados, de manera casi perversa por lo inadvertida, en problemáticas secundarias, y en ocasiones en temáticas que bordean lo

irrelevante. De igual manera, cuando se reconocen en alguna medida los problemas, las soluciones propuestas para los mismos suelen atacar síntomas, no causas. Como decía ese fantástico conejo de la obra de Lewis Carroll, dirigiéndose a Alicia, que estaba en el país de las maravillas: “tú simplemente deséalo, y verás como el problema desaparece.” Lo único que Alicia podía hacer, pues era una chica muy despierta, era menear su rizada cabellera y pensar que aquella gente estaba desquiciada.

Se trataría de un mecanismo psicológico de defensa para no enfrentar las causas de los problemas, especialmente cuando éstos son complejos, de difícil y lenta solución, y cuyo tratamiento requeriría, por fuerza, una buena dosis de sacrificio de los privilegios propios. El sistema funciona de la misma manera en la que un enfermo de alcoholismo, por ejemplo, se niega a reconocer el origen íntimo de su enfermedad, y al hablar de su comportamiento morboso desvía su propia atención, e intenta desviar la atención de los que lo rodean, hacia otras causas diferentes de su mal. Se comprenderá que de esta manera el enfermo no hallará nunca cura para su mal: el primer paso sería reconocer la naturaleza de su enfermedad y el origen de la misma. Si no lo hace así cualquier tratamiento estará condenado al fracaso.

Ya hemos visto que en medio de islotes de progreso económico y de vida moderna que son exteriormente asimilables a modos de vivir de los de los países desarrollados, existen en el país amplísimos sectores de población urbana y campesina azotados por la violencia, la pobreza y la injusticia. La sola enumeración de algunas de las más impactantes realidades colombianas del presente bastaría para escandalizar a una sociedad distinta de la colombiana, cuya sensibilidad está adormecida por décadas de presenciar las más aberrantes enfermedades sociales de manera casi impávida. O, como decíamos antes, reaccionando ante ellas tibiamente, intentando con desgana paliar algunos de los síntomas, evitando profundizar en las causas fundamentales de estas realidades. Mencionemos, a manera de ilustración, algunos ejemplos de entre los muchos que pueblan los inquietos sueños de millones de colombianos:

1) *las minas antipersonales*, que son una de las armas más crueles e indiscriminadas de cualquier conflicto, se encuentran sembradas en jurisdicción de casi 700 municipios, una mayoría entre los aproximadamente 1.100 municipios de la nación (diario “El Tiempo” de Bogotá). La publicación de esta cifra corresponde a marzo del año 2006, e incluye el dato de que hubo un incremento de 289 municipios en relación con los que estaban afectados en el año

2000. Es decir que en menos de seis años se produjo este aterrador aumento en los sembrados de minas antipersonales. Ahora bien, los recursos que se destinan a combatir este flagelo son escasísimos, y en la medida en que las minas son “sembradas” en zonas alejadas de las capitales por lo mismo decrece el interés de las clases dirigentes en el daño que causan (después de todo las víctimas son en su inmensa mayoría campesinos y niños campesinos). Añade el informe que en los últimos cinco años 2.358 personas fueron víctimas de estos artefactos.

2) *el desplazamiento forzado de personas* a causa del conflicto armado no se puede cuantificar de manera precisa, pues muchísimos de los desplazados no se anuncian como tales por temor (en ocasiones los victimarios persiguen a sus víctimas desde apartadas regiones hasta los barrios de invasión de las grandes ciudades). No obstante lo anterior, diversos organismos tanto nacionales como internacionales han hecho cálculos que hacen oscilar la cifra entre dos y tres millones de personas. Imaginarse este número de desplazados internos en cualquier país del mundo sería ya escandaloso, y congregaría a todos los sectores de la sociedad para dar alivio o solución a tamaño problema. En Colombia, por el contrario, los desplazados son prácticamente invisibles, y hasta se hacen sospechosos ante las gentes que no son víctimas del desplazamiento forzado (entre los colombianos ha hecho carrera la actitud siguiente: frente a una víctima, el pensamiento reflejo de millones de colombianos, reflejo casi vergonzante, es: “algo habrá hecho....”).

3) *la impunidad en la justicia*: a pesar de que no se pueden establecer datos con precisión debido al desorden existente en este campo, diversas fuentes afirman que un noventa por ciento de los delitos en Colombia se queda sin castigo. La magnitud de estas cifras tendría que causar, por sí sola, un maremoto en la sociedad colombiana: después de todo, sin justicia no se puede pensar en construir nada sólido que garantice un futuro más o menos de cierto progreso y bienestar. Sin embargo, en Colombia esta cifra suscita apenas un fatalista encogimiento de hombros entre la inmensa mayoría de los ciudadanos, acostumbrados a ver que en su país casi nada funciona, y que asumen esta revelación como una más entre muchas que afectan a la sociedad, y sobre la cual no tienen manera de incidir ni en favor ni en contra. Casi como si fuera un fenómeno atmosférico contra el cual no hay nada qué hacer.

4) *Las muertes violentas entre los defensores de derechos humanos* han ido en ascenso en los últimos años, a pesar de las vehementes protestas en contrario de los sucesivos gobiernos nacionales, que adjudican estos hechos a factores de delincuencia común y actos de grupos guerrilleros, y no a actos originados en sectores de las fuerzas oficiales y sus ocasionales aliados entre la delincuencia paramilitar. Las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por

fuerzas del estado han ido en aumento. El antiguo representante en Colombia de la Organización Mundial contra la Tortura, Alberto León Gómez, declaró que la situación de los defensores de los DD HH en el país es “crítica”.

5) *El fenómeno del secuestro y las desapariciones de ciudadanos de toda índole* merece una mención especial aquí, pues Colombia es el país con mayor número de secuestros en el mundo, exceptuando quizás a México (lo de este último país sería diferente, ya que allá tendríamos que sumar, para otorgarle este dudoso primer puesto, a las víctimas del “secuestro express”, que en Colombia es de rara ocurrencia). Hoy se habla de una cifra que oscila entre dos y tres mil secuestrados en Colombia. La cifra de desaparecidos es aún más difícil de establecer, pero sin duda alcanza a miles de víctimas. No hay acuerdo sobre estos números, pues muchas familias no denuncian el secuestro de alguno de sus miembros por temor a que los secuestradores maten al secuestrado en cuanto la noticia llegue a oídos de las autoridades. Y muchos desaparecidos no son reportados como tales pues en muchos casos sus familias no tienen información sobre la razón de la ausencia de su pariente. En lo concerniente a estos crímenes de lesa humanidad, lo más notorio desde el punto de vista de la reacción social es que en infinidad de casos las familias de las víctimas son relegadas a una especie de hueco negro de la conciencia nacional, por lo que se han convertido en dolientes invisibles, condenadas a rumiar su dolor en soledad, mantenidas en la penumbra por los medios de comunicación y por la mayoría de los estamentos gubernamentales, que se diría que temen abrir una caja de pandora si se ocupan de este problema, que ven como prácticamente insoluble. Sólo cuando el secuestrado pertenece a alguna familia importante, o es miembro de algún grupo político, económico o social de relieve, se genera interés en el caso por parte de las clases dirigentes y los más importantes medios de comunicación.

Como ilustración de este singular enfoque citaremos a la periodista colombiana María Jimena Duzán, quien escribió, en una de sus columnas para el diario “El Tiempo” de Bogotá, refiriéndose a las víctimas de los grupos paramilitares de derecha que han azotado por años el campo colombiano, y que hoy están inmersos en un ambiguo e incierto proceso de perdón y reinserción con el gobierno nacional (aunque todo indica que siguen operando bajo otros ropajes). Dice la periodista: “(...) ¿Y por qué un acto de reparación a las víctimas sería impensable en Colombia? Por varias razones. La primera es de orden conceptual. A diferencia de Argentina, donde no hay confusión entre quién es la víctima y quién el victimario, en Colombia existe por parte de algunas voces en el Gobierno la pretensión de hacernos creer que los victimarios son también víctimas a

quienes hay que recibir como héroes. La segunda tiene que ver con el hecho de que no tenemos una memoria colectiva y, por lo mismo, somos proclives a olvidar. A no celebrar nada, a no recordar nada ni a reaccionar ante nada (...)"

Qué duda cabe de que el lenguaje ayuda a crear los imaginarios de una sociedad, dando forma al pensamiento y a la manera cómo la gente se ve a sí misma. El lugar social, es decir la percepción que el individuo tiene de sí mismo frente a su entorno, se ve influido por pequeños y grandes mecanismos incrustados en el lenguaje cotidiano, que es de articulación casi instintiva, poco afectado por engranajes de reflexión. Escasas veces somos concientes de las inferencias del lenguaje que utilizamos, especialmente en nuestra vida diaria. Hablamos y pensamos mediante palabras que poseen una carga ideológica cuya naturaleza particular no nos detenemos a examinar. Tampoco nos detenemos a examinar las razones para emplear una palabra o una particular estructura de lenguaje en vez de otra diferente. Lo anterior nos ayudará a ilustrar mejor el fenómeno de cómo uno de los vocablos utilizado por el Estado para describir rangos de tarifas de cobro de servicios públicos y cargas impositivas en Colombia, ha evolucionado hasta llegar a ser una manera de describir a toda la sociedad, encasillando de esta manera a los ciudadanos en una especie de camisa de fuerza social. Nos referimos a la llamada "estratificación". En el país, desde hace muchos años y por diferentes razones, el estado clasificó a la población en seis estratos socioeconómicos. Con esta clasificación se buscó, entre otras cosas, la aplicación de tributos diferenciales y esquemas tarifarios graduales en la prestación de los servicios públicos. Este fenómeno no se limita sólo al caso colombiano, por supuesto. La diferencia con otros países estriba en que en Colombia, con el paso del tiempo, esta clasificación amplió de manera casi imperceptible su cobertura conceptual, dejando de ser únicamente una escala tarifaria para metamorfosearse en una descripción del lugar que el ciudadano ocupa en el grupo social. Así, se nace en un hogar de un determinado estrato, y por lo general esa condición fija en adelante prácticamente todo el modo de vida de la persona: la calidad de la vida y de los desarrollos a lo largo de la misma tenderán a estar acordes con el estrato de origen, que como decimos ha sido determinado por el accidente del nacimiento. Si se ha nacido en un hogar de estrato 4, digamos, la lógica indicará que la educación se recibirá en un establecimiento educativo del mismo estrato, y el niño o niña primero, y luego el joven o la joven, tendrán sus relaciones dentro de grupos del mismo estrato, y al llegar la edad del enamoramiento la familia de la novia o novio mirará atentamente el estrato del que proviene el pretendiente sentimental. Desde luego que existe la posibilidad de ascender de estrato, y también de caer a un estrato

más bajo. De hecho, al estar el lenguaje cotidiano impregnado de este concepto, el temor a “bajar de estrato” está siempre presente en la mayoría de las personas, sobre todo en las últimas décadas, cuando la implementación de políticas de libre comercio y globalización económica han precipitado a las otrora florecientes clases medias a un declive cada vez más pronunciado. En todo caso, ascender de un estrato inferior a uno superior no es una tarea fácil en Colombia, dadas las raíces profundamente conservadoras de la sociedad, y las aún rígidas concepciones de clase social que imperan en los diferentes “estratos”. En tiempos recientes, la inmensa mayoría de las gentes que han “subido de estrato” pertenecen a sectores cuyas recién adquiridas riquezas surgen teñidas de un sospechoso tinte de ilegalidad, dada la proliferación de actividades ilegales o criminales en los ámbitos nacionales (narcotráfico, especulación financiera privilegiada, corrupción dentro del estado, empresas criminales de todo pelambre). Finalmente, hay que anotar que las convulsiones sociales causadas por el largo conflicto colombiano han creado nuevas condiciones de ascenso (y descenso) social, cuyos resultados aún no es posible determinar con claridad dada la inmediatez de las intensas fuerzas que aún actúan sobre la vida colombiana. Habrá que esperar al futuro para establecer los nuevos paisajes de las estructuras sociales colombianas, decantadas las tormentas presentes.

Los casos arriba mencionados, tomados casi al azar de la memoria reciente de los acontecimientos nacionales, sirven como base de reflexión para precisar cómo la sociedad colombiana recurre de manera constante a incontables y no muy sutiles mecanismos para minimizar y modificar en beneficio propio la percepción de su propia naturaleza, convulsionada y poco feliz. A Colombia le sucede lo del paciente descrito más arriba, que rechaza tener una enfermedad grave, e insiste en que le suministren medicinas para la gripe y la jaqueca cuando lo que lo aqueja es un cáncer que amenaza con hacer metástasis. A diferencia de muchas otras naciones, donde sus gentes están dotadas de una cierta visión para mirarse a sí mismas sin concesiones piadosas ni engañosas, la sociedad colombiana evidencia un bloqueo de juicio político e histórico entre sus clases dirigentes. Este bloqueo vela esfuerzos para autoevaluarse con objetividad, y para describirse a sí misma en sus múltiples dimensiones y problemáticas. No basta el optimismo para dar forma a una ilusión: se deben incluir las lacras históricas, las tremendas inequidades actuales, las causas últimas de las crecientes fragmentaciones sociales. No hay posibilidad de progreso si no se contempla a la sociedad como un todo cuyas partes son interdependientes: cuando grandes sectores populares son invisibilizados por los estamentos más prósperos de la sociedad, nunca se podrá hablar de progreso y riqueza social, sólo se

hablará de acumulación de riqueza en manos de unos pocos y en detrimento de inmensas mayorías.

Pero este breve ensayo no tiene el propósito único de ser un trabajo dedicado a señalar los vicios que afean los múltiples rostros de ese país llamado Colombia, que por otro lado es poseedor de numerosas virtudes, y cuya misma fortaleza humana en medio de las convulsionadas circunstancias en las que se desarrolla su peripecia vital provee méritos para fomentar iniciativas y designios que en ocasiones sorprenden por su fortaleza y vigor. Creemos, eso sí, que la mejor vía para llegar a una aproximación de la verdad es a través de la exposición pública de las propias lacras. Este convencimiento abraza también la idea de que sólo de esta manera se entreabrirán puertas que inviten a una sociedad enferma a adoptar procesos de regeneración.

Partiendo entonces de lo dicho podremos asomarnos ahora a tres experiencias urbanas, se diría que encerradas en sí mismas y generadas por su propia dinámica, que están señalando, así sea de manera aún vacilante, otro camino para la vida en sociedad en Colombia, y que en los últimos años se han erigido como fuente de inspiración para el resto del país, en donde centenares de conglomerados urbanos, grandes, medianos y pequeños, enfrentan la vida cotidiana en medio de ambientes muchas veces de caos, corrupción y desesperanza. La descripción de estas tres experiencias, junto con los encuentros realizados por los editores de este volumen con los principales protagonistas de esas experiencias, son el objeto de este trabajo de la Fundación Kreanta.

Colombia ha sido tradicionalmente un país de ciudades. Salvo quizás el caso del Brasil, es el país de la América hispana que cuenta con el mayor número de urbes que superan el medio millón de habitantes. Esta concentración de población en las ciudades se ha intensificado en décadas recientes, en parte siguiendo una tendencia universal en donde se abandona, por factores que no es del caso describir aquí, el campo por la urbe, y en otra parte a causa de las particulares condiciones de desplazamiento del campo a las ciudades, condiciones que en Colombia han sido creadas en gran medida por el largo conflicto armado interno.

De las tres ciudades que son el eje de este estudio de la Fundación Kreanta, Bogotá, Medellín y Manizales, dos de ellas comparten orígenes culturales, advirtiendo que una de ellas, Medellín, es capital de una región –Antioquia– que originó en el siglo antepasado los arrostos colonizadores que llevaron a la fundación de la otra, Manizales, allá por la mitad del siglo XIX. Se podría decir que Medellín funge en este proceso como una especie de “mama grande” de Manizales, aunque con el correr del tiempo, a lo largo de sus más de ciento cincuenta años de vida, Manizales haya desarrollado una personalidad propia, que si bien sigue ligada a la cultura madre de la tierra “paísa” (que es como se denomina en Colombia a la cultura antioqueña) manifiesta sin embargo rasgos originales que en el presente la distinguen y separan paulatinamente de su ancestro fundador.

En todo caso, ambas ciudades comparten características comunes dado su origen, aunque difieran en edad. Al campesino “paísa” –y la antigua Antioquia es una tierra de fundamentos campesinos, así hoy Medellín sea una metrópolis de más de dos millones de habitantes y Manizales se acerque al medio millón-- se le adjudican históricamente virtudes de trabajo que escasamente son compartidas por el resto del país: frugalidad, ahorro, tenacidad en el empeño, gran capacidad de trabajo y sacrificio para lograr metas de seguridad y solidez económicas para él y su familia, conservadurismo en sus costumbres, y una gran religiosidad. Además, las tierras de ambas regiones, asentadas sobre los espinazos de las cordilleras central y occidental, fueron colonizadas por pobladores que en su inmensa mayoría descendían de los primeros colonos españoles que llegaron a los valles de Antioquia, valles agrestes y aislados entre sí y del resto del país por una atormentada geografía. Allí no se produjo casi mezcla de razas ni combustión de culturas: las dispersas naciones indígenas encontradas por los conquistadores en esta parte de los Andes se negaron a someterse a la cruz y la espada europeas y fueron prácticamente exterminadas antes de que se cumpliera el primer siglo de la presencia hispánica.

De esta homogeneidad original en el poblamiento provienen sin duda los conservadurismos y los tradicionalismos de sucesivas generaciones de pioneros. Tanto Medellín como Manizales se han desarrollado, pues, como capitanías de regiones montañosas, la primera menos fértil que la segunda, pero más rica en minerales, mientras que la región en donde se asienta Manizales disfruta de las tierras agrícolamente más ricas del país, que dieron origen a la industria cafetera nacional: durante muchos años el café fue el puntal de la economía colombiana, proveyendo la

mayor fuente de ingresos por exportaciones al extranjero, y por esta razón en las primeras décadas del siglo XX Manizales mantuvo en su puño la dirección económica de Colombia.

Por añadidura, la región antioqueña –capitaneada por las clases dirigentes de Medellín— construyó a lo largo de décadas, a caballo del siglo XX, la zona industrial más notable y poderosa del país. En síntesis, pues, tanto Medellín como Manizales comparten un mismo origen remoto, y se han formado históricamente partiendo de condiciones culturales, económicas e incluso raciales de gran homogeneidad. Las características anteriores ayudarían a explicar porqué los impulsos cívicos que de cuando en cuando surgen en cualquiera de estas dos ciudades suelen encontrar terreno fértil en la mayoría de la población, contribuyendo a la construcción de imaginarios y acciones sociales más o menos exitosas en el contexto amplio urbano.

Las condiciones arriba enunciadas no se asemejan a las de Bogotá, que es la tercera ciudad objeto de este estudio de la Fundación Kreanta. Esta ciudad, capital de Colombia, tiene una historia muy distinta, tanto en sus orígenes como en la dinámica de su crecimiento a través de los siglos. Bogotá es una de las ciudades más antiguas de América, y fue fundada hace casi quinientos años por un abogado granadino doblado a conquistador, Gonzalo Jiménez de Quesada, que encontró en esta fértil sabana de los Andes, elevada más de dos kilómetros y medio sobre el nivel del mar, una tierra bendecida tanto por su feracidad como por la naturaleza generalmente dócil de sus pueblos indígenas, que recibieron a los conquistadores españoles sin notables reacciones bélicas.

Hecha capital a causa de su privilegiado entorno y de la presencia ancestral en las regiones aledañas de grandes conglomerados indígenas, de manera natural se facilitó la formación de una clase de españoles criollos encumbrados, cuya riqueza se levantó con base en el trabajo de los nativos. De este modo los peninsulares originales sentaron los cimientos de una sociedad fundamentada en el trabajo de los otros, los indígenas, mientras ellos se ocupaban del gobierno, de la explotación de los nuevos territorios que prometían riquezas sin límites, utilizando fuentes casi inagotables de mano de obra representada en las tribus sojuzgadas, y diseñando instituciones que organizaran y reglamentaran el control y manejo de los pueblos recién sometidos a la servidumbre colonial.

De esta manera se desarrolló la historia de Bogotá, vegetando en su letargo de siglos, gobernando territorios de una vastedad que desafiaba la imaginación de los viajeros europeos que obtenían licencia de la corona española para visitar estas tierras, alimentando una clase gubernamental y unas clases sociales dedicadas al cultivo de las buenas maneras y al examen de la contabilidad de los réditos de sus encomiendas y sus minas. Esta amodorrada existencia sufrió una tremenda convulsión a comienzos del siglo XIX, cuando los criollos neogranadinos (tal era el nombre del virreinato, Nueva Granada, en honor al abogado fundador de la ciudad) exasperados por los desaires de los españoles que ocupaban los altos cargos gubernamentales, resolvieron alzarse en rebelión contra el poder español, y después de casi una década de combates aquí y allá entre fuerzas enviadas de la península y ejércitos conformados por nativos y criollos, expulsaron finalmente del territorio a los últimos vestigios de la autoridad de la metrópoli de ultramar.

Por supuesto que este hecho independentista poco significó para los indígenas y para las crecientes masas de campesinos y ciudadanos del común que poblaban montañas, valles y urbes de todo tamaño. Se había reemplazado una soberanía por otra, amos españoles por amos criollos, y los nuevos señores continuaron con las mismas prácticas, con una que otra concesión a las presiones que de vez en cuando se ejercían sobre el gobierno de Bogotá y los cambiantes gobiernos provinciales, que en ocasiones, durante el primer siglo de independencia, intentaron crear autonomías diversas sin mayor éxito. Lo único que lograban era precipitar al país, de manera recurrente, en guerras intestinas que provocaban la desgracia y la ruina generales entre las clases populares y campesinas.

Entretanto, Bogotá y sus clases gobernantes siguieron cultivando su idea de nación, idea intensamente endógena, es decir, que poco consultaba las realidades del país cuyo gobierno albergaba. Esta manera endógena de ver el país colombiano se mantiene hasta hoy, con cierta evolución y algún progreso en el método, a pesar de que en la actualidad las comunicaciones y las imágenes vuelan, literalmente, y han hecho accesibles infinidad de regiones del territorio y de la cultura nacionales. Pero el espíritu, ya que no la letra, de las rígidas instituciones coloniales que durante tres siglos formó los modos de vida criollos en el virreinato español, y que mantiene su vigilancia sobre la vida republicana hasta el presente, evoluciona con lentitud, se deshace con

reticencia de sus potestades absolutistas, y permea aún de manera notoria el alma oficial colombiana. La historia suele ser un dinosaurio adormilado, lento y pesado, y en ocasiones son necesarios siglos para que se modifiquen substancialmente los horizontes de su vida jurásica.

Bogotá fue hasta hace escasos cincuenta o sesenta años una adormilada urbe, que alcanzó su primer millón de habitantes sólo hacia la mitad del siglo pasado. A partir de finales de la década de los años cuarenta y comienzos de la de los años cincuenta del siglo XX, Colombia comenzó a vivir otra etapa de convulsiones políticas y sociales que fueron causa de las primeras migraciones masivas del campo a las ciudades. El principal polo de atracción de estas migraciones fue y sigue siendo Bogotá, que ha padecido un proceso de rápido crecimiento poblacional, y que alberga hoy a unos siete u ocho millones de habitantes (los resultados censales más recientes, que dan una aproximación entre estas dos cifras, han sido puestos en tela de juicio por académicos y por sectores de la vida económica, alegando defectos en su metodología y otros problemas similares. Pero de todos modos dan una idea de la magnitud de la ciudad, aunque en rigor no sean muy exactos para los expertos). La diversidad de orígenes de los emigrados internos que llegan a Bogotá ha creado un todo fragmentado en entidades poseedoras de fuertes individualidades, que están sometidas a intensos regionalismos manifestados en costumbres y acentos sociales muy distintos entre sí. Estos diversos orígenes sólo se acompañan cuando son llevados a los terrenos de las emociones patrióticas, alimentadas según la conveniencia de los dirigentes de turno. El colombiano está siempre dispuesto a dejarse atrapar por este tipo de emociones de bandera e himno nacional, debilidad que no ha pasado desapercibida a los políticos y otras gentes que ven allí la posibilidad de aprovecharse de tal condición para sus fines particulares disfrazándolos de servicios a la patria.

Estas características de múltiples culturas y distintas maneras de ser que intentan convivir en el espacio estrecho de la ciudad, cada día más compleja, en donde los alcances del estado y de las autoridades son limitados, y en donde los feudos locales dentro de la urbe se afirman mediante todo tipo de mecanismos políticos, legales e ilegales, e incluso mafiosos, ha hecho de Bogotá, de la misma manera que todas las grandes urbes latinoamericanas, una ciudad con múltiples trampas a la hora de lograr una coherencia de propósitos que requieren el concurso de la ciudadanía en general. Por esto son tan notables los esfuerzos de las últimas administraciones capitalinas elegidas popularmente para lograr la concreción de amplios planes urbanos, y para instrumentar mecanismos de pedagogía ciudadana, esfuerzos que han logrado un cierto éxito

dentro de los límites de posibilidades condicionadas por el hecho de ser una capital de un país en vías de desarrollo, y vivir en medio de lo que los colombianos han dado en llamar un “conflicto de baja intensidad”, que no parece tener posibilidades de finalizar en el horizonte histórico del futuro cercano.

Bogotá, enero de 2008